

La columna de...

DR. JUAN LUIS OYARZO GÁLVEZ,
ACADÉMICO, INGENIERO COMERCIAL

Educación Pública: el abismo que ya no se puede ocultar

La educación pública se encuentra en un mal momento. Sin embargo, aquello es una sensación de años, incluso décadas. La brecha entre colegios públicos y privados se ha abierto cada vez más, y muestra de aquello son los resultados que año tras año vemos en el instrumento de selección a la educación superior, actualmente conocida como PAES.

De acuerdo, a los últimos resultados de la PAES rendida en diciembre del 2024 los colegios particulares obtuvieron en promedio 145,3 puntos más que los colegios particulares subvencionados. Obtienen además 180,7 puntos más que los colegios municipales y, por último, tiene en promedio 196,7 puntos más que los colegios dependientes de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Esto lleva a que, en el ranking de los 100 establecimientos con mejores puntajes en la PAES, sólo exista un establecimiento municipal y un establecimiento subvencionado. El resto son todos colegios particulares.

El problema se agudiza cuando contrastamos esta información con la matrícula del año 2024, donde vemos que 89,2% de nuestros niños y jóvenes se encuentran en colegios municipales y subvencionados y, sólo el 10,8% del total de niños y jóvenes se encuentran en establecimientos particulares. Aquí es donde surge la brecha, la que en el transcurso del tiempo se ha profundizado.

De acuerdo al informe Acción Educar (2019) el gasto público por estudiante varía según el nivel educativo. Para la educación parvularia el gasto anual por alumno es cerca de \$1.900.000 pesos; mientras que en la educación escolar y superior el gasto es de aproximadamente \$2.000.000 y \$3.500.000 de pesos anuales respectivamente. Estos montos reflejan el esfuerzo fiscal que realiza el Estado Chileno para cada nivel educativo, donde debemos tener presente que muchos de estos establecimientos deben cumplir con requisitos, donde uno de ellos es la asistencia promedio de los estudiantes. Esto es complejo, ya que le entregamos a nuestros colegios una responsabilidad que debe asumir el Estado como tal, y que se relaciona con la obligación de las familias de enviar a sus hijos al colegio.

Si bien pueden existir algunas diferencias debido a la inflación y cambios en las políticas educativas, se estima -de acuerdo a la Dirección de Presupuesto (DIPRES)- que el gasto promedio por estudiante de un colegio particular es 3,1 veces más que la de un estudiante municipal y subvencionado. Estas cifras son reveladoras y significativas, ya que, si el gasto promedio para un estudiante de la educación municipal es cerca de 2 millones, la cifra se ve incrementada a 6 millones si se trata de establecimiento privados.

Algunos especialistas sostienen que el problema en la educación no sólo es una cuestión de recursos. Sin embargo, las cifras revisadas en esta columna indican otra cosa. A esto se suma que un profesor del sistema privado recibe en promedio un 21% más de remuneración que aquel que cumple funciones en el sistema público, lo que constituye otro antecedente clave.

En este contexto, la Región de Magallanes enfrenta un escenario complejo, con una paralización docente que evidencia la mala gestión de las autoridades regionales en el traspaso al SLEP y que, en palabras del Ministro de Educación hace insostenible un incremento en las remuneraciones de nuestros docentes a nivel regional.

Si el Estado desea avanzar hacia una educación más equitativa, es indispensable reconocer que las brechas actuales no son meramente coyunturales ni atribuibles exclusivamente a factores individuales. La desigualdad estructural en el financiamiento, la gestión y las condiciones laborales debe ser abordada con políticas públicas decididas, coherentes y sostenibles en el tiempo.